

Derrota de las privatizaciones, victoria de la movilización popular

Lecciones de Perú y Paraguay



Jaime Coronado Del Valle

*Democracia, ciudadanía y protesta social:
la experiencia de Arequipa
y la colonialidad del poder*

Carlos Leyton Muñoz

*Arequipa: de la privatización
a la recuperación de la dignidad*

Marielle Palau

*Luchas sociales
obligan a retroceder al gobierno
y detienen el proceso de privatización*

**Dania Pilz, Quintín Riquelme
y Verónica Villalba**

*Los movimientos sociales
en el contexto actual del Paraguay*

Democracia, ciudadanía y protesta social: la experiencia de Arequipa y la colonialidad del poder

Por Jaime Coronado Del Valle*

■ Uno

No cabe duda de que los acontecimientos que se desarrollaron en ciudad de Arequipa, capital del departamento del mismo nombre y considerada tradicionalmente como la segunda ciudad más importante del Perú, causaron gran impacto en la opinión pública nacional e internacional. Ello no solamente respondió al hecho de que Arequipa haya sido en la historia política de este país el escenario de anteriores revueltas, rebeliones y pronunciamientos, tanto militares como civiles, sino porque se trató de una inesperada y violenta revuelta en contra de un gobierno democrático recientemente elegido, tras un régimen corrupto y represivo como lo fue el del fujimorismo.

Más allá del aspecto noticioso, el impacto de la revuelta arequipeña tiene que ver con el hecho de que en ella se anudaran una serie de cuestiones que hacen a la trayectoria histórica y política del Perú y de América Latina, y en las que se plantean interrogantes sobre las formas en que se relacionan hoy política y economía en el contexto de la actual reestructuración económica internacional, esto es, en el actual proceso de globalización del poder. En estos acontecimientos también está implicada una manera de “ver” la realidad, es decir, las categorías con que miramos y analizamos los eventos más importantes de nuestra vida social. Ello tiene que ver con una matriz de percepción y conocimiento que es tramada por la “colonialidad del poder” y genera una mirada de nuestra realidad persistentemente “eurocéntrica”.

*Sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Master en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e Investigador Asociado del Centro de Investigaciones Sociales (CEIS), Lima-Perú.



■ Dos

Luego de la caída del régimen fujimorista que gobernó el país durante casi diez años, e inmediatamente después del breve y transitorio gobierno del Dr. Valentín Paniagua, fue elegido como nuevo Presidente de la República el Dr. Alejandro Toledo Manrique, líder del partido Perú Posible (PP). Toledo asumió el mando el 28 de julio de 2001, luego de haber logrado convertirse en el recipiente y canal de confluencia de las fuerzas políticas y sociales opositoras al régimen fujimorista, pero también porque el eje de su campaña era la promesa de luchar contra la pobreza y de dar solución al grave problema del desempleo, ahora generalizado como producto directo de las políticas neoliberales del gobierno anterior. “Toledo es más trabajo” fue su lema de campaña.

Para muchos comentaristas, entrábamos con buen pie a la democracia y existía la legítima esperanza de un gobierno que revirtiera lo hecho por el gobierno anterior. El presidente ofreció constituir un gabinete “de todas las sangres”. La cuestión es que colocó en la conducción de la política económica a Pedro Pablo Kuczynski, tecnócrata y financiero internacional, cuyas convicciones parten del reducido y

pragmático recetario neoliberal: obsesión por el equilibrio de tan sólo indicadores macroeconómicos; un presupuesto equilibrado gracias a la reducción de toda inversión social por parte del Estado; la abstención del gobierno sobre toda política de desarrollo productivo nacional; el pago puntual de la deuda externa y la generación de las mejores condiciones para el capital internacional.

Al fin y al cabo, ya el régimen fujimorista había avanzado lo suficiente. El fujimorismo había eliminado todo control sobre el capital financiero nacional e internacional; redujo drásticamente las tarifas aduaneras a favor de la producción foránea; canalizó los recursos fiscales para el pago de servicios de la deuda externa y sobrevaluó la moneda a la vez que dolarizaba masivamente las transacciones internas. En segundo lugar, había erradicado ya todo marco normativo e institucional vinculado a las demandas, reivindicaciones y necesidades de los trabajadores y de las capas medias; había eliminado todas las normas, instituciones y mecanismos de defensa y negociación de los trabajadores; había reducido el mercado de empleo, congelado los salarios y comprimido el consumo, eliminando subsidios y reduciendo al mínimo el “gasto social” del Estado. En tercer lugar, desmanteló a las empresas estatales de carácter productivo y de servicios destinadas fundamentalmente a beneficiar a los grupos más débiles de la sociedad, implicando el “remate” y la “liquidación” de éstas, las cuales pasaron al sector privado, beneficiándose con ello sólo los grandes grupos de poder económico y la tecnocracia gubernamental.

Todo el tejido social e institucional que había surgido de los anteriores procesos relativos de democratización y nacionalización de la sociedad fueron eliminados, cooptados y despolitizados corporativamente. La estructura productiva fue presionada hacia su reprimarización y el país fue obligado a insertarse en una “economía global”, dentro de una competencia desigual con los países industrializados y dentro de un mercado dominado por las grandes empresas transnacionales. Mediante las políticas dictadas por el credo “neoliberal” y las estrategias de la tecnocracia capitalista mundial del FMI, el Banco Mundial y la Banca privada transnacional, el fujimorismo había logrado imponer un conjunto de políticas económicas exclusivamente destinadas a garantizar los máximos beneficios para el capital internacional y para aquellos capitales privados locales coincidentes con el esquema de poder global.

Sin embargo, como dicen los actuales neoliberales, reciclados en democracia, de lo que se trata ahora es de “corregir, en lo posible, las graves y numerosas perversiones del modelo, pero no es factible salirse, al menos por ahora, de su marco general”. Para ellos, esas “imperfecciones” se deben al gasto del Estado y las medidas clientelísticas realizadas por el fujimorismo a fin de garantizar su fracasada reelección. Pero para nada hacen mención al “shock” aplicado para implementar el modelo neoliberal, que elevó de un día para otro de 7 a 12 millones la cantidad de pobres en un país de 22 millones de habitantes. Menos aún mencionan que el actual INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) señalaba que entre 1997 y 1998 los pobres no eran un 37%, como había señalado la dictadura, sino un 42%, y que para el año 1999 alcanzaban a un 48% de la población nacional. Toledo mismo, en su primera campaña electoral frente a Fujimori, pedía al ex presidente que no se reeligiese porque él iba a continuar su obra y a construir sobre sus “logros”.

“Ante la consecuente protesta y lo inverosímil de su versión, el gobierno tuvo que retroceder, viéndose obligado a abrir nuevamente el diálogo y comprometerse a cumplir sus promesas electorales.”

■ **Tres**

En condiciones en las que se da una continuación del modelo económico neoliberal, no debía llamar la atención que la desconfianza y la frustración crecieran aceleradamente en la mayoría de la población. El gobierno demostró no tener alternativas serias para enfrentar una recesión que lleva más de cuatro años, y los problemas del desempleo se agravaron. A esto se suma una serie de constantes desatinos del Presidente. Por ejemplo, en un país empobrecido como el Perú, y en el contexto del descubrimiento de las millonarias cuentas de personajes del anterior gobierno fujimorista, Toledo comenzó el suyo subiéndose el sueldo a 18.000 dólares mensuales, según dijo “porque el presidente debe estar bien pagado para evitar la tentación”. Pero además, sus maneras personales producían efectos contraproducentes en la mayoría de la población, no por ser “cholo”, como insistía él en presentarse, sino por el carácter corrosivo de sus vacilaciones, sus imprevistas presentaciones públicas, su deplorable oratoria; no por algún dejo serrano, sino por su premeditado acento norteamericano; y finalmente, por su verborragia demagógica, que lo llevaba a prometer una cosa un día y a incumplirla el otro. Desde los primeros meses de iniciado el nuevo gobierno, una multiplicidad de movilizaciones públicas comenzaron a sucederse en calles y plazas de la capital por parte de diversos sectores y organizaciones sociales (sindicatos, profesores,

jubilados, gremios profesionales, trabajadores despedidos, etc.), la gran mayoría de ellos marginados y reprimidos por el anterior régimen político. Pero por sobre todo, el país presenció la realización de una serie de protestas y revueltas que tuvieron como escenario a la mayor parte de, sino todas, las regiones del interior del país. Aquí podemos recordar dos ellas.

En los primeros meses, el gobierno tuvo que enfrentar una protesta en la región sur del país, más específicamente en la capital del quechua-aymara y campesino departamento de Puno, cuya población se movilizó violentamente por varios días ante el incumplimiento de una promesa electoral: hacer pasar por ahí una futura carretera transoceánica, destinada a intercomunicar la costa peruana con el interior de Brasil y de Bolivia. La población tomó el aeropuerto local e impidió por la fuerza que turistas y pasajeros abordasen sus respectivos vuelos de retorno. De igual modo, tomaron y destruyeron una serie de locales de organismos gubernamentales, enfrentándose violentamente con la policía. El gobierno, que primero la había denunciado como “un tinglado” organizado por la “mafia corrupta fujimorista”, se vio obligado a establecer el diálogo y a comprometerse con cumplir con lo prometido.

También se vio obligado a enfrentar movilizaciones de protesta en la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto, ubicado en la selva nororiental del país. Las reivindicaciones planteadas pasaban desde la secular marginación de esa región hasta las políticas gubernamentales que amenazaban con eliminar una serie de incentivos tributarios que gobiernos anteriores habían establecido para el desarrollo agrícola e industrial de la región. Durante la campaña electoral, el candidato Toledo se había comprometido a resolver estos problemas. La protesta fue sumamente violenta, ocasionando la destrucción de locales públicos y bloqueos de carreteras, y produciéndose un violento enfrentamiento con la policía durante varios días. El gobierno envió en dos oportunidades “Comisiones de Alto Nivel”. La primera fue inmediatamente rechazada, pues se hicieron presentes tan sólo interlocutores de mando medio. La segunda, conformada por varios ministros de Estado, fracasó por la actitud prepotente y amenazadora del gobierno. El ministro de la Presidencia, Carlos Bruce, fue desalojado con piedras y palos del local donde se estaban llevando a cabo las negociaciones. Esta vez, el gobierno denunció que tras la protesta loretoana, y del “Frente Patriótico de Loreto”, se encontraba una organización política de extrema izquierda, la cual pretendía “traer abajo la democracia”. Ante la consecuente protesta y lo inverosímil de su versión, el gobierno tuvo que retroceder, viéndose obligado a abrir nuevamente el diálogo y comprometerse a cumplir sus promesas electorales.



■ Cuatro

En el contexto de las marchas y movilizaciones cotidianas en la capital, y de las protestas y revueltas en el interior del país, la prensa del gobierno, así como sus asesores y socios políticos en el Congreso y en el Gabinete Ministerial, insistían en que, aún reconociendo que se trataba de “un embalse de reivindicaciones” o de “expectativas electorales”, normales luego de cualquier proceso electoral, esas movilizaciones y protestas no hacían sino poner en grave riesgo la famosa y manida “transición democrática”. Esa era, a su modo, también una interpretación de la mayoría de las encuestas de opinión que comenzaban a mostrar la vertiginosa caída de la aprobación de la gestión presidencial, y de la velozmente rápida desaprobación del Parlamento y del gobierno en general. A esto se le sumaban las críticas diarias que, con idas y venidas, los ex candidatos del APRA y de Unidad Nacional lanzaban al gobierno. Desde el lado “izquierdo” del escenario, García Pérez (APRA) insistía en que el gobierno debía implementar un conjunto de tímidas medidas reactivadoras y redistributivas. De otro lado, desde la “derecha”, la conservadora líder de la Unidad Nacional (UN), Lourdes Flores Nano, declaraba que las movilizaciones y protestas podían ser detenidas sólo si delante de ellas se encontraba un gobierno firme y con un rumbo fijo.

Es por ello que este gobierno decide afrontar con “mano dura” cualquier expresión de protesta y de movilización social en el país. El presidente Toledo, y sobre todo su mi-

nistro del Interior, Fernando Rospigliosi, comienzan a adoptar una estrategia que dejaba en un segundo plano el diálogo y acentuaba más lo meramente represivo. El ministro de Economía, P.P. Kuczynski, acompasaba esta tendencia, arguyendo que las movilizaciones y protestas podían ahuyentar a la tan esperada “inversión extranjera”, con lo cual estaba en entredicho la imagen de estabilidad del país. Comienza la discusión en el Parlamento de una ley para juzgar y aumentar las penas de cárcel para los responsables de organizar paros y huelgas que conllevasen tomas y/o destrucción de locales públicos, o que bloquearan carreteras e “impidieran el libre tránsito de los ciudadanos”. El ánimo del gobierno estaba, pues, predispuesto a confrontar cualquier movilización o protesta que, en su percepción, perturbase la tranquilidad y la estabilidad del gobierno. Por eso, antes del estallido del 14 de junio, estaban dadas ciertas condiciones para lo que vendría después.

■ Cinco

Para el neoliberalismo, las privatizaciones no son cualquier cosa. Además de un rápido y facilista expediente para resolver el déficit fiscal, frente a los grupos de poder económico son una demostración de que el gobierno apuesta por un modelo de libre mercado, es decir, una economía donde reine el capital privado y donde el Estado no le haga sombra. Pero además, frente a los organismos multilaterales co-

mo el FMI y el BM, son la prueba de que se siguen sus recetas de abrir la economía a la inversión transnacional para de esta manera obtener el aval para préstamos de la banca privada internacional. El equipo económico del ministro Kuczynski se había comprometido con el FMI a reunir 700 millones de dólares por concepto de privatización en el ejercicio 2002, meta que esperaba alcanzar gracias a la venta de empresas públicas. El efecto sería directo: cumplir con los objetivos macroeconómicos pactados en una carta de intención con el FMI, y generar confianza en el sistema financiero internacional, lo cual puede traducirse obviamente en nuevos créditos y mayores inversiones foráneas. Pero además, la venta de empresas públicas era considerada como el envío de una señal de confianza hacia los inversionistas internacionales. Por estas razones, el gobierno definió como un asunto de vital importancia, casi estratégico, el continuar con la política neoliberal de venta de empresas públicas. Dentro del cronograma privatizador se encontraba la venta de dos empresas públicas de servicios eléctricos, EGASA y EGESUR, que abastecían a la sureña región de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Durante varios años, el pueblo de Arequipa había venido sufriendo un creciente empobrecimiento. Las políticas neoliberales del fujimorismo habían llevado a la quiebra a muchas empresas industriales, y otras se habían trasladado a Lima. Durante la década anterior, las inversiones productivas habían sido mínimas. El pueblo de Arequipa centraba su expectativa en un próximo Gobierno Regional, el cual se abocaría a planificar y llevar a cabo un Plan de Desarrollo centrado en sus propios recursos. Durante el gobierno de García Pérez, Arequipa había sido considerada como Región y se había determinado que el 51% de las acciones de EGASA y EGESUR le correspondieran. Esas empresas no sólo no estaban en quiebra, sino que por el contrario estaban rindiendo utilidades. Ante la persistencia de una atmósfera privatizadora y ante el temor de que el próximo gobierno diera el paso de privatizar sus dos recursos, los arequipeños emplazaron públicamente al candidato Toledo a fin de que definiera su posición en caso de ganar las elecciones. En el local de la Federación de Trabajadores de Arequipa, Toledo se comprometió a no privatizar ninguna de las dos empresas. Es ese compromiso público el que explica la tan alta votación que obtuviera en esos departamentos.

A pesar de todo esto, desde comienzos de año el gobierno había decidido poner en venta las dos empresas eléctricas del sur del país mediante un proceso de licitación pública. Aún cuando prontamente esa decisión desató varias movilizaciones y actos de protesta en la ciudad de Arequipa, paralelamente subsistía en la población la esperanza de que el Presidente recapacitara y diera marcha atrás al proceso. Todo lo contrario: aguijoneado por su ministro de Economía en cuanto al compromiso adquirido con el FMI



para sanear de esta manera el déficit fiscal, presionado por el ala conservadora de la oposición que le exigía firmeza en el asunto, y fortalecido además por la visita en abril del presidente norteamericano George W. Bush (lo cual le sumó unos cuantos puntos en las encuestas), Toledo decidió seguir adelante. Los alcaldes distritales deciden radicalizar la protesta y optan por desarrollar una “huelga de hambre” en la Catedral de la ciudad. Otros alcaldes y autoridades se van sumando a la medida, incluyendo al Alcalde Provincial de Arequipa.

Con el fin de impedir la apertura de los sobres que contendrían los resultados de la licitación pública, el Alcalde de Arequipa presenta un recurso legal que es amparado por el Poder Judicial, el cual ordena paralizar todo el proceso de privatización. Por su lado, Toledo y sus ministros de Economía y del Interior deciden optar por una posición más dura y de confrontación con el pueblo arequipeño: “la privatización se llevará adelante, cueste lo que cueste y no me temblará la mano”, repetía el Presidente en cuanto lugar público se presentaba.

Y llegó el 14 de junio, fecha en que el gobierno abrió los sobres de la licitación dando como ganadora y nueva propietaria de EGASA y EGESUR a la empresa transnacional TRACTEBEL SA. La firma belga, única empresa que se presentó, pagó poco más de 164 millones de dólares, apenas 11 millones de dólares más que la base de venta de ambas empresas, lo cual en el mercado energético se considera un precio de ganga. Sobre la empresa belga pesaban acusaciones de pago de supuestos sobornos al ex presidente Alberto Fujimori, según declaraciones de un congresista del APRA. Sin el menor respeto a la palabra dada y al compromiso político de no privatizar las empresas, y sin el menor respeto por la Resolución Judicial que ordenaba la paralización del proceso, el gobierno había llevado adelante la privatización.

El pueblo de la ciudad de Arequipa se sintió engañado. Burlado y enardecido salió a las calles y a la Plaza de Armas a protestar contra el gobierno y declarar a Toledo como “traidor”. Lejos de atemperar la situación, el ministro de Justicia amenaza denunciar por prevaricato al Juez que había amparado el recurso interpuesto por el Alcalde de la ciudad, además de referirse a él como el “tremendo juez de la tremenda corte”. Eso enardeció aún más los ánimos de los arequipeños, quienes utilizaron los ladrillos que habían desempedrado de la Plaza de Armas para defenderse de la

arremetida de la Policía Nacional. La batalla es abierta y los enfrentamientos se desarrollan durante el día, la noche y la madrugada. Los mismos ladrillos son utilizados por la población para levantar barricadas en calles y plazas, y con el fin de impedir el paso de los vehículos policiales. El pueblo arequipeño se sentía engañado por el presidente, quien no se había tomado la molestia de explicar los motivos que lo llevaron a cambiar radicalmente de posición, ni de pedir la opinión del pueblo sobre la transferencia. Simplemente se impuso la venta de las empresas. Sin embargo, para el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, “lo que existe en Arequipa es un grupo de dirigentes radicales y politizados que quieren ganar espacio ante la cercanía de las elecciones municipales y regionales”.

En las protestas confluían cuestiones que iban desde los intereses económicos y políticos hasta los de índole moral y ética. La población se consideraba agraviada por la promesa incumplida, por los improperios lanzados por los

miembros del gobierno, y por el irrespeto a las decisiones del Poder Judicial. En toda la ciudad se empezaba a escuchar el tradicional grito regional de “¡Arequipa revolución!”. Esto ya no era sólo una protesta, sino que se convertía en una revuelta.

El gobierno decide acentuar la represión y envía refuerzos policiales desde Lima. La población no se amilana y sigue protestando, movilizándose y combatiendo. El domingo 16, el gobierno decide declarar el Estado de Emergencia, sancionar el “toque de queda” de 10 de la noche a 5 de la mañana, y colocar a la ciudad bajo control de las Fuerzas Armadas. Estas pretenden amedrentar a la población haciendo que los soldados destruyan las barricadas y haciendo circular tanques y camiones portatropas por las calles. Igual, la población no cesa en sus movilizaciones y sus protestas, y por el contrario, el contingente que se suma a la revuelta es cada vez mayor: se acrecienta el ruido de cacerolas en la madrugada, y personalidades locales importantes comienzan a señalar la posibilidad de desconocer a Toledo como Presidente de la República. La ciudad se había convertido en el epicentro de una rebelión civil que amenaza con extenderse por todo el sur del país, comprometiendo a los departamentos de Cuzco, Tacna, Moquegua y Puno. En Tacna, el Frente Patriótico, conformado por sindicatos y organizaciones de base, convoca a una movilización en solidaridad con Arequipa. Entre 3.000 y 4.000 personas apedrean locales públicos. En el centro de la ciudad diversos colegios estatales y privados suspenden las clases, mientras que los mercados optan por

“En toda la ciudad se empezaba a escuchar el tradicional grito regional de “¡Arequipa revolución!”. Esto ya no era sólo una protesta, sino que se convertía en una revuelta.”

cerrar sus puertas ante posibles saqueos. La policía redobla la vigilancia en el aeropuerto ante versiones de que manifestantes pretenden tomarlo.

Para el país, Arequipa se estaba convirtiendo en el ejemplo de una lucha y de una terca voluntad colectiva de no dejarse avasallar por la arbitrariedad y por un gobierno que para ese entonces contaba con menos del 25% de aprobación, antes de haber cumplido su primer año. El gobierno comprende que nada podía hacer ya para que el pueblo de Arequipa retrocediera en su lucha.

Para el lunes 17, la violencia se había incrementado en las calles y la prensa informaba de un saldo de al menos un muerto, 95 heridos y daños cuantiosos. La protesta tendía a convertirse en una verdadera rebelión. Ese mismo lunes, el presidente Toledo optó por ceder y propuso al Consejo de Ministros organizar una Comisión de Alto Nivel que iniciara las negociaciones. El martes 18, el Presidente empezaba a redactar su carta de disculpas al pueblo de Arequipa. Lo mismo hizo el ministro de Justicia. La "Comisión de Alto Nivel" es conformada por el Arzobispo Vargas, el ex Defensor del Pueblo Jorge Santistevan, el padre Gastón Garate y otros ministros del gobierno. La misión arribó a Arequipa el mismo martes por la mañana y, luego de un comienzo poco auspicioso, que incluyó el apedreamiento del ómnibus en el que se disponía a salir del aeropuerto, sostuvo los primeros contactos y reuniones con los alcaldes arequipeños y con representantes del Frente Cívico de la ciudad. Se entabla el diálogo, y como producto de él, el gobierno y las autoridades arequipeñas hacen público un pronunciamiento denominado la "Declaración de Arequipa". En ella el gobierno se compromete a no seguir adelante con la privatización de las empresas eléctricas y dejar el asunto en manos del Poder Judicial.

Leída la "Declaración de Arequipa", toda una población se volcó a la Plaza de Armas para celebrar la suspensión de las privatizaciones. El mitin de ese día, miércoles 19 de junio, fue una fiesta democrática. Era un triunfo temporal, pero triunfo al fin. El pueblo de Arequipa había defendido consecuentemente la intangibilidad de sus recursos y bienes públicos, haciendo retroceder al gobierno y a uno de los ejes de su política económica. Había obtenido un desagravio público, el respeto para el Poder Judicial y el respeto al derecho de la mayoría de estar en contra de la privatización. Por su lado, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, presentó su carta de renuncia irrevocable. En ella señalaba su desacuerdo con la forma en que se había mane-

jado la situación. No pidió disculpas. El Presidente logró disuadir a varios ministros que pretendían hacer lo mismo.

La revuelta de Arequipa fue el catalizador que aceleró la crisis interna del gobierno, precipitando posteriormente el cambio del gabinete ministerial, con la consiguiente salida del ministro de Economía, P.P. Kuczynski.

Queda por ver si el gobierno continuará con la política de corte neoliberal o cambiará de rumbo. Posiblemente la continuará por otros medios y bajo otros mecanismos. Como sea, la experiencia de Arequipa

“Para el país, Arequipa se estaba convirtiendo en el ejemplo de una lucha y de una terca voluntad colectiva de no dejarse avasallar por la arbitrariedad...”

hace posible suponer que, si éste fuera el caso, las circunstancias políticas han variado, y la protesta y la revuelta social no se harán esperar.

■ Seis

La previsión del curso de la dinámica política y social en el Perú tendrá que ver también con la forma en que percibamos y miremos la realidad. Ante hechos como la revuelta en Arequipa, no deja de llamar la atención ante todo la persistencia de una fraseología que durante la década de los años '80 caracterizó las perspectivas teóricas predominantes acerca de la política. Quiero llamar la atención al menos sobre sólo una de esas ideas: aquella que considera que cuando se pasa de un régimen "autoritario" a un régimen "democrático" nos encontramos dentro de un llamado proceso de "transición". Sugiero que la utilización de esta terminología supone algunos "presupuestos" que evitan o evaden hacer una cabal comprensión del conjunto de problemas implicados en hechos tan graves como los sucedidos en Arequipa.

En lo que concierne a esta idea, no es sólo torpe pensar que la realidad y los cambios políticos puedan desarrollarse de una forma lineal: de un régimen "A" se transita hacia un régimen "B". Autores que hace mucho pusieron en cuestión a la llamada "transitología" plantearon que quizás fuera mucho mejor hablar de "ciclos recurrentes" de alternancia entre un "autoritarismo" secular y una "democracia" esquiva e inestable¹. Sin embargo, aunque interesante, eso no explica el por qué de estos "ciclos recurrentes". Además, esto conduce a recurrir al expediente cultural, por ser la "cultura" lo más estable y permanente en la vida social, es decir, lo más "natural". De ese modo, "de por sí y en sí", América Latina tiene una "cultura" (una "naturaleza") proclive al "autoritarismo" que lleva a los sujetos a permitir, aceptar y

legitimar regímenes “dictatoriales”, y a no valorar a los regímenes “democráticos”. América Latina tendría, desde esta perspectiva, una “identidad” autoritaria.

La primera cuestión es que el “presupuesto” racional de un tránsito lineal de “A” hacia “B” es no poner en cuestión qué es “A” y qué es “B. Me explico: no es cierto, por ejemplo, que el “régimen fujimorista” (“A”) haya sido tan sólo una “dictadura”, una “tiranía” o una “autocracia”. Sin embargo, desde esa perspectiva, el foco de análisis y la referencia de las prácticas políticas quedan fijados en la imagen de un personaje –Fujimori o Montesinos, únicos responsables de tal descalabro– pero en el entramado de relaciones y de intereses sociales y políticos que están por detrás de la escena pública. Como sostuvieron en su momento autores como Aníbal Quijano, el fujimorismo implicó más bien un específico régimen político sustentado en una particular “coalición de poder” que articuló a una fracción de las Fuerzas Armadas, una naciente y voraz tecnocracia y a grandes sectores empresariales ligados al capital financiero internacional, los cuales, para hacer viables sus intereses, aplicaron consistentemente políticas de corte neoliberal y del recetario del FMI y del BM. Y por eso mismo, también fue una forma específica y concreta de expresión del actual proceso de la contrarrevolución mundial que tomó el nombre de “globalización”².

Una segunda cuestión es que el régimen “B”, el “democrático”, tampoco es puesto en cuestión. Se apuesta por un régimen político que no es sino la recreación del formato “clásico” de actores, reglas e instituciones, es decir, de “ciudadanía” como relación formal entre individuo y Estado, “proceso electoral” como único medio de elección de líderes y “separación y equilibrio de poderes”, consustancial a un Estado de Derecho. Se alude pues, como meta, al viejo formato europeo-occidental de la “democracia representativa”, al que se le atribuye un valor ‘universal’, aplicable en toda circunstancia y lugar. El problema con estas “miradas” y con esta forma “eurocéntrica” de “ver” nuestra realidad política es que la construcción de democracia es sustraída del patrón más general de macroprocesos y/o sistemas del cual forma parte, en cada momento y de cada sociedad concreta, es decir, de sus estructuras concretas de poder³. Y el asunto crucial es que este “formato” no funciona entre nosotros, no porque tengamos una “identidad” o una “cultura” ancestralmente “autoritaria”, sino porque primero corresponde a una experiencia histórica irrepetible, la europea; y segundo, porque nuestras estructuras de poder están tramadas no sólo de diversas relaciones de explotación y formas de control del trabajo, sino sobre todo por la idea de que no todos somos iguales por naturaleza, y a eso hace referencia, precisamente, la perspectiva de la “colonialidad del poder”.



En toda sociedad emergida en un contexto colonial, las relaciones materiales, subjetivas e intersubjetivas están atravesadas no sólo por clasificaciones de tipo social (“clases”) sino también por clasificaciones “étnicas” y “raciales”. La “colonialidad” subsistente en la actual estructura de poder implica que se asume como real un constructo mental denominado “raza” que se originó al inicio de la formación del mundo colonial del capitalismo, en América en primer lugar. La idea de “raza” no sólo refiere a que existen seres biológica y naturalmente diferentes, sino también biológica y naturalmente desiguales. Sólo en un momento posterior a la idea de “raza” le fue sumada la idea de “color”. Las ideas de “raza” y las identidades sociales como “indio”, “negro”, “mestizo” y “amarillo” tienen un origen en la colonialidad de ese poder. La relaciones de dominación jerárquicas de lo “blanco/europeo” por sobre lo “no-blanco/no-europeo” son expresadas en las relaciones sociales como que lo primero es “mejor/superior/civilizado”, mientras que lo segundo es “malo/inferior/incivilizado”. En la manera de conocer y aprender la realidad, esa relación jerárquica de dominación se expresa como “eurocentrismo”, es decir, una forma de mirar que presupone y otorga a lo “blanco/europeo/sajón” la calidad de medida de otras experiencias históricas. Su experiencia es la meta y culminación a la que se debe llegar, porque son sinónimo de “civilización”, “modernización” y “desarrollo”. Todo eso hace parte de un patrón de poder mundial que nació como capitalista/colonial/moderno y eurocéntrico⁴.

La “colonialidad” de esta estructura de poder implica que el “blanco/europeo/sajón” es sujeto de ciudadanía y democracia moderna. Los “no-blancos/no-europeos/no-sajones”, por naturaleza, no. A estos últimos no se les ha permitido, al menos permanentemente, una ciudadanía real; es decir, un ejercicio real y efectivo de derechos ciudadanos, políticos, sociales, culturales, económicos, en suma... humanos. Mientras que en la experiencia europea existía la desigualdad social, ello no implicaba que los individuos se percibieran como desiguales biológica y naturalmente, lo cual les permitió las bases de formación para un Estado-nación moderno y la ciudadanía, esto es, considerarse como partícipes naturalmente iguales en la esfera de lo político. En América Latina, el orden político expresaría un orden de exclusión, marginación y de discriminación que tiene por base no sólo la desigualdad social, sino también la desigualdad colonial entre “dominantes/blancos/europeos” y “dominados/no-blancos/no-europeos”, lo que impide la constitución de un efectivo Estado-nación moderno y la generalización de una ciudadanía realmente ejercida⁵.

“En América Latina, el orden político expresaría un orden de exclusión, marginación y de discriminación que tiene por base no sólo la desigualdad social, sino también la desigualdad colonial entre ‘dominantes/blancos/europeos’ y ‘dominados/no-blancos/no-europeos’...”

cionalidad oficial no tenía cabida. El tema ni siquiera fue abordado. Pero ¿no era éste, justamente, el problema histórico y político crucial que en América Latina abre brechas entre la sociedad civil y el Estado? ¿No son éstas las brechas por las cuales se cuelean y se autonomizan regímenes corruptos y autoritarios como el fuji-morismo y/o cuerpos burocráticos como las fuerzas armadas? Más allá de las discrepancias político-formales, hubo un consenso básico entre las élites políticas partidarias en cuanto a la naturaleza de la sociedad y a los intereses económicos que debían ser protegidos: los del capital. La forma de institucionalidad política no podía ser otra que la “democracia representativa de partidos”, o sea, ellos.

Y es de este modo que la “colonialidad del poder” es recolocada nuevamente en el centro mismo de la nueva institucionalidad que debía emerger tras el régimen autoritario. Fue precisamente en ese momento en que se discutía la “transición política” que los movimientos y frentes regionales se estaban revitalizando, demandando la solución a sus reivindicaciones. Ellos también se habían expresado en términos de sentirse marginados y no representados en aquel proceso de “transición democrática”. No había ninguna duda de que a partir del inicio del siguiente gobierno los movimientos y frentes regionales comenzarían a exigir y a confrontar a la “democracia”, y se volvería a este aparente “círculo vicioso” de confrontación entre una sociedad civil excluida y una sociedad política excluyente. Por el contrario, la democratización de la sociedad supone, como punto de partida, desechar el punto de vista “eurocéntrico” de que la “democracia” consiste tan sólo en el voto para elegir “representantes. La experiencia histórica nos ha demostrado, una y otra vez, que los “elegidos” hacen siempre lo contrario de lo demandado por sus electores, o se vuelven prontamente corruptos cuando no represivos y sangrientos, y buscan imponer su reelección vía el uso de los recursos públicos, la intimidación o el terror.

Como fuera señalado por Carlos Franco, en el contexto de la movilización arequipeña, fue evidente el surgimiento de una alianza entre dirigentes regionales y alcaldes provinciales; y por la forma en que actuaron, más allá de sus exigencias económicas, su demanda básica fue la de ejercer el derecho a ser considerados como interlocutores válidos frente al gobierno⁶. Una voluntad política que tuviera como objetivo la transformación democrática de la sociedad y del Estado hubiese visto, más bien, la oportunidad para constituirlos no sólo en interlocutores sino en actores democráti-

■ **Siete**

La historia política de América Latina no es lineal ni cíclica. Es la historia de la lucha contra una estructura de poder en la que se traman diversas formas de explotación y de control del trabajo con diversas formas de dominación, discriminación y exclusión. De ahí la importancia de la revuelta arequipeña. Más allá de sus resultados, ella se inscribe en esa historia.

Es preciso recordar que en la fase final del régimen fuji-morista se había establecido una “Mesa de Diálogo” coordinada por la OEA en la que participaban los partidos políticos, centrales sindicales y algunas ONGs (es decir, todo lo que había dejado de ser representativo en la actual sociedad peruana), con el fin de discutir el inicio de la llamada “transición democrática”. Una dirigenta nacional de los Comedores Populares había manifestado su preocupación por no habersele permitido participar. La presidenta de una ONG le contestó que “eso era normal”, y que no podía ser de otra manera, porque ahí se estaban resolviendo, ante todo, problemas “políticos” y no “sociales”. El hecho era que dentro de la visión de una “transición política”, la cuestión fundamental del problema de la representación política de los intereses de sectores secularmente marginados por la institu-

cos. La experiencia de la revuelta en Arequipa demuestra que la “colonialidad del poder” no sólo conduce a la reproducción de una trama institucional excluyente y marginadora, sino que imposibilita la potenciación de prácticas e interacciones políticas democráticas y democratizadoras.

La población de Arequipa colocó en el centro del debate nacional una cuestión que para la mayoría de las élites políticas sigue siendo un axioma intocable: las privatizaciones, como parte de un modelo económico socialmente excluyente y políticamente inviable. Los motivos y los intereses expuestos durante el transcurso de la movilización arequipeña no hacían sino dejar entrever una alternativa diferente a ese modelo: el desarrollo no puede descansar en la venta y remate de los activos del Estado, sino en un proyecto de desarrollo planificado, con una estrategia encaminada no sólo a potenciar la economía nacional, sino también a insertarla en la economía mundial de una manera no subordinada, en vez de bajo los parámetros del poder transnacional. En eso consiste hoy, precisamente, una alternativa democratizadora consecuentemente opuesta al fuji-morismo y al neoliberalismo.

La importancia de la revuelta de Arequipa es haber dejado entrever las posibilidades de construir una forma diferente de ciudadanía y de forjar una nueva y diferente institucionalidad política. Aunque un ingrediente importante de la movilización fuera la protesta por el incumplimiento de una promesa electoral, se trató de una cabal reacción ciudadana frente a una decisión arbitraria, vertical y antidemocrática. Eso hizo posible entrever la posibilidad de construir una ciudadanía que implique el ejercicio real y concreto de derechos individuales y colectivos; de redefinir la ciudadanía como la potestad inalienable de participar

y de tener injerencia real en todo proceso o instancia en donde se toman las decisiones que atañen a nuestra vida cotidiana. Pero además, con ello, se pudo entrever la posibilidad de una institucionalidad que se arme a partir de instancias, medios y canales de participación directa, esto es, una democracia participativa, lo que implica un régimen político distinto, que sin desalojar la representación y los procedimientos electorales se constituya en base a una democracia directa de sectores sociales excluidos y que deciden autogobernarse. Esto es, ejercer un control sobre el poder, la toma de decisiones y los representantes y elegidos. En esto consiste hoy una verdadera alternativa democratizadora frente a cualquier “autoritarismo”.

Finalmente la experiencia de la revuelta de junio en Arequipa apunta a concluir en que no puede ni podría existir un régimen político democrático estable sin paralelamente democratizar sociedad y Estado. No puede hablarse de un proceso de democratización sin la construcción deliberada de una sociedad encaminada a desterrar tanto la explotación como la dominación, la discriminación y la exclusión; y que ello implique el lograr construir un régimen democrático que sea una forma de expresión, en lo político, de relaciones de igualdad y de solidaridad en lo social. En suma, sin un deliberado propósito de descolonizar las relaciones sociales, las prácticas y el imaginario, no puede construirse una democracia estable.

Si Arequipa no le da continuidad a ese proceso, más tarde o más temprano, otros serán los llamados a transitar por ese camino.



■ **Bibliografía**

Coronado, Jaime 1997 “Mariátegui y la reflexión política en América Latina: Un nuevo comienzo”, en *Anuario Mariateguiano* (Lima) Vol. IX, N° 9.

Franco, Carlos 1993 “Visión de la democracia y crisis del régimen”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 128, Noviembre-Diciembre.

Nef, Jorge 1995 *Demilitarization and Democratic Transition in Latin America* (Quito: FLACSO).

Nef, Jorge 1986 “Redemocratization in Latin America or the Modernization of the Status Quo?”, en *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 11, N° 21.

Nun, José 2001 *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los Políticos?* (México: Fondo de Cultura Económica).

Quijano, Aníbal 2002 “Globalización, colonialidad del poder y democracia”, en *Series Cuadernos* (Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual) N° 1.

Quijano, Aníbal 2001[a] “¿Entre la Guerra Santa y la Cruzada?”, en *Cuadernos de Debate* (Lima: Colectivo Amauta) N° 3.

Quijano, Aníbal 2001[b] “Poder y Derechos Humanos”, en *Poder, Salud Mental y Derechos Humanos* (Lima: CECOSAM).

Quijano, Aníbal 2000[a] “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander (compilador) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO-UNESCO).

Quijano, Aníbal 2000[b] “El fantasma del desarrollo en América Latina”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) N° 2.

Quijano, Aníbal 1999 “¿Qué tal raza!”, en *Familia y cambio social* (Lima: CECOSAM).

Quijano, Aníbal 1997 “Estado-nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas”, en Helena Gonzales y Heiduffl Schmidt (org.) *Democracia para una nueva sociedad (Modelo para armar)* (Caracas: Nueva Sociedad).

Quijano, Aníbal 1995 “El fujimorismo y el Perú”, en *Cuadernos* (Lima: SEDES) N° 1.

Quijano, Aníbal 1994 “Colonialidad del poder y democracia en América Latina”, en *Revista Debates* (Lima).

Quijano, Aníbal 1993 “‘Raza’, ‘etnia’ y ‘nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas”, en *Encuentro Internacional: José Carlos Mariátegui y Europa. El otro aspecto del descubrimiento* (Lima: Amauta).

Quijano, Aníbal 1992[a] “Colonialidad y Racionalidad/Modernidad”, en *Perú Indígena* (Lima) Vol. 13, N° 29.

Quijano, Aníbal 1992[b] “Notas sobre la cuestión de Identidad y Nación en el Perú”, en *Cuadernos de Antropología* (Lima: TOCAPO) N° 5.

Quijano, Aníbal 1991 “La modernidad, el capital y América Latina nacen el mismo día”, en *Boletín Illa* (Lima) N° 10, entrevista.

Quijano, Aníbal y Wallerstein, Immanuel 1992 “Americanness as a concept, or the Americas in the World-system”, en *International Social Science Journal* (París: UNESCO) N° 134.

Seligson, Mitchell A. 1988 “Democratization in Latin America: The Current Cycle”, en James M. Malloy y Mitchell A. Seligson (eds) *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America* (USA: University of Pittsburgh Press).

■ **Notas**

- 1 Véase Seligson, 1988; Nef, 1986, 1995; Coronado, 1997.
- 2 Véase Quijano, 1995. Sobre la “globalización” puede verse Quijano, 2001[a], 2002.
- 3 Véase Nun, 2001; Franco, 1993.
- 4 Véase Quijano, 1991; 1992[a] [b]; 1993; 1999; 2000[a] [b]; Quijano y Wallerstein, 1992.
- 5 Véase Quijano, 1994; 1997; 2000[b].
- 6 Entrevista a Carlos Franco en el diario *La República* del 23 de junio de 2002.